

La consulta plantea si existe contradicción entre el contenido de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y el artículo 13 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación públicas y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

I

En primer lugar, para analizar la posible contradicción entre ambas normas, es preciso concretar el ámbito de aplicación de la Ley 27/2006, que se regula en su artículo 1, señalando que “1. Esta Ley tiene por objeto regular los siguientes derechos:

a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre.

b) A participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, y cuya elaboración o aprobación corresponda a las Administraciones Públicas.

c) A instar la revisión administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las autoridades públicas que supongan vulneraciones de la normativa medioambiental.

2. Esta Ley garantiza igualmente la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental, de manera paulatina y con el grado de amplitud, de sistemática y de tecnología lo más amplia posible.”

Como puede observarse el objetivo fundamental es garantizar la publicidad de la información ambiental. El artículo 2.3 de la citada Ley otorga una definición sobre que se entiende por Información ambiental “: toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones:

a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos.

b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras

liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a).

c) Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.

d) Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.

e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c), y

f) El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c)."

Teniendo en cuenta estos extremos, los pondremos en consonancia con la Ley Orgánica 15/1999, que resulta aplicable al tratamiento que los datos personales se efectúe, de ahí que en el artículo 13 de la Ley 27/2006 en su apartado segundo se disponga que "Las solicitudes de información ambiental podrán denegarse si la revelación de la información solicitada puede afectar negativamente a cualquiera de los extremos que se enumeran a continuación:

f) Al carácter confidencial de los datos personales, tal y como se regulan en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, siempre y cuando la persona interesada a quien conciernan no haya consentido en su tratamiento o revelación."

La consecuencia de que la Ley 27/2006, remita al contenido de la Ley Orgánica 15/1999, se debe a que con carácter general se otorgará sin problema alguno la información ambiental que no vaya referida a personas físicas. Cuando la información que se vaya a otorgar afecte a personas físicas y por tanto se trate de cesiones de datos personales, debe de acudir al régimen jurídico previsto en la Ley Orgánica 15/1999.

II

Con carácter general, debe indicarse que los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, extienden su protección a los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere al tratamiento de sus datos de carácter personal, siendo

definidos éstos en el artículo 3.a) de la citada Ley como *“cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.

Por su parte, el artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, precisa que constituye un dato de carácter personal *“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”*

La Directiva 93/46/CE en su artículo 2 declara que *“será identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”*. Por su parte, las distintas recomendaciones del Consejo de Europa vinculan el concepto de persona identificable al esfuerzo necesario para logra la identificación, de forma que no será identificable la persona cuya determinación exija *“plazos o actividades desproporcionadas”*. Este ha sido también el razonamiento seguido por los tribunales que han venido considerando que una persona física era identificable cuando razonablemente y sin grandes esfuerzos era posible asociar los datos proporcionados a una determinada persona.

III

Desde el punto de vista de la normativa de protección de datos cabe señalar que esta comunicación de datos personales constituye una cesión de datos de carácter personal definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, como *“Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”*.

El otorgamiento de información por parte de la Confederación a quienes lo soliciten constituirá en todo caso, una cesión de datos de carácter personal, cuyo régimen jurídico es distinto, al tratamiento que de los datos personales efectúe la Confederación hidrográfica que sí se regirá por el artículo 6 y sí que le resultará aplicable el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

Pero cuando hablamos de otorgar información, el régimen jurídico es distinto y se encuentra previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 donde se establece que *“Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.”*, aunque establece algunas excepciones en el número segundo de dicho artículo, entre las que cabe destacar la prevista en la letra a *“Cuando la cesión esté autorizada en una ley.”*

Sin embargo la propia Ley 27/2006, no excepciona la necesidad de consentimiento sino que lo exige, de ahí que cuando la información que se

pretenda otorgar incluya datos personales de terceras personas, deberá recabarse el consentimiento de éstas.

A mayor abundamiento, el artículo 2.3 de la Ley 27/2006, en su último apartado donde define que se entiende por información ambiental señala “el estado de la salud y seguridad de las personas”.

En cuanto a la comunicación o cesión de datos de salud, es preciso indicar que la Ley Orgánica 15/1999 establece un régimen especial para su tratamiento y, en su caso, comunicación, considerándolos datos especialmente protegidos, debiendo plantearse si existe algún supuesto en que la propia Ley Orgánica da cobertura a esa cesión.

Como regla general, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”. Este artículo determina el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal debido a su carácter orgánico.

La especial protección conferida a los datos relacionados con la salud de las personas no es arbitraria, sino que resulta de lo dispuesto en las normas Internacionales y Comunitarias reguladoras del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. En este contexto, tanto el artículo 8 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, así como el artículo 6 del Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, ratificado por España en fecha 27 de enero de 1984, hacen referencia a los datos de salud como sujetos a un régimen especial de protección.

IV

En definitiva, podemos concluir que la Ley 27/2006, excepciona de su ámbito de aplicación, la comunicación que de datos personales se vaya efectuar, sometiéndola al régimen jurídico previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de ahí la necesidad de recabar el consentimiento de los afectados y no otorgar la información cuando no se tenga dicho consentimiento.

Teniendo en cuenta que la finalidad de la Ley 27/2006, es otorgar información medioambiental, como hemos puesto de manifiesto a lo largo del informe, esta finalidad debe de ponerse en consonancia con el principio de proporcionalidad y finalidad de los datos, que son piedra angular en la protección de datos, y se encuentran recogidos en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, señalando que *“los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito*

y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. A su vez, el apartado segundo del mismo artículo establece que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

En consecuencia, para atender la finalidad de la Ley 27/2006 y cumplir con las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999, se podrá comunicar información medioambiental, siempre y cuando ésta no permita la identificación de personas físicas.

Por tanto, la Confederación hidrográfica podrá ceder información cuando ésta se encuentre debidamente disociada, según el procedimiento definido en el artículo 3 f) de la Ley Orgánica 15/1999, que permita a aquélla conocer las circunstancias cuya información le ha sido solicitada sin referenciar la información en un sujeto concreto.

En este sentido el artículo 3, letra f) de la Ley Orgánica 15/1999 define el procedimiento de disociación como *“todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable.”* Por su parte, el Reglamento de desarrollo de dicha Ley califica como dato disociado *“aquél que no permite la identificación de un afectado o interesado.”*